

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO No. __134

Santiago de Cali, dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Reparación Directa
EXPEDIENTE:	76109-33-33-001-2017-00009-01
DEMANDANTE:	Oscar Luis Ortega Ruiz y otro oscarluisortegarui@gmail.com jandresrm@gmail.com
DEMANDADO:	Nación – MINDEFENSA – Armada Nacional
PROVIDENCIA:	Recurso de apelación, confirma auto que rechazó por caducidad

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN

I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Corresponde decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el Auto Interlocutorio No. 480 de septiembre 25 de 2017 proferido por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, que rechazó la demanda de reparación directa presentada, por haberse configurado el fenómeno de la caducidad.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

El señor Oscar Luis Ortega Ruiz, mediante apoderado, promovió el medio de control de reparación directa en contra la Nación – MINDEFENSA - Armada Nacional, con el fin de que se declare administrativamente responsable al ente demandado, por los perjuicios causados con la expedición del acto que retiró del servicio activo al señor Oscar Luis Ortega Ruiz, al haber desaparecido su fundamento con el auto de diciembre 21 de 2015 notificado en febrero 11 de 2016, que resolvió a su favor un proceso disciplinario.

III. PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, mediante providencia de septiembre 25 de 2017, rechazó la demanda con fundamento en el artículo 164, numeral 2º, literal i), del Código de Procedimiento Administrativo y de lo



Contencioso Administrativo (CPACA), respecto del término de los dos años para presentar la demanda a través de este medio de control, motivado en lo siguiente:

“(…) De conformidad con lo discernido, es preciso reiterar que en el asunto se escogió de forma equivocada el medio de control, aunque, si bien se puede decir que este no se escoge al arbitrio del actor, sino que, el mismo se deriva del daño señalado y de las pretensiones invocadas, por lo que a juicio del Despacho el medio de control idóneo correspondería a la nulidad y restablecimiento del derecho en el que también es dable solicitar pretensiones encausadas en el medio de control de reparación directa.

Ahora, no es posible ordenar adecuar la demanda a este medio de control, como quiera que ya operó el fenómeno de la caducidad, pues la expedición del acto administrativo fue en el mes de abril de 2011 y la demanda se interpuso cuatro (4) años más tarde, término que supera ampliamente en los cuatro (4) meses, señalados en el literal d), numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(…)

Visto lo que antecede, amerita el rechazo de la demanda por indebida escogencia de la acción y haber operado el fenómeno de la caducidad en el medio de control idóneo en esta demanda que corresponde al de nulidad y restablecimiento del derecho, según lo preceptuado en el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 el cual dispone:

“Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1.- Cuando hubiere operado la caducidad”

IV. EL RECURSO Y LA OPOSICIÓN.

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante apeló¹ argumentando que:

“Es así como en el presente asunto no se está intentando probar la existencia de un causal para la declaración de ilegalidad de un acto administrativo, argumentando el quebrantamiento de las normas en que deberían fundarse, la falta de competencia del funcionario encargado de su expedición, la falsa motivación o la desviación de las atribuciones de quien las profirió, sino por el contrario la mora en el trámite del procedimiento disciplinario, lo que ocasionó el daño cuya reparación se pretende mediante la utilización del medio de control de Reparación Directa.

…puesto que la reparación por el daño que aquí se pretende, tiene su causa en la mora en el desarrollo de una acción disciplinaria, cuyos términos se encuentran establecidos en la Ley 836 de 2003, los cuales fueron sobrepasados con exceso por parte de la Accionada, como se encuentra plenamente probada en el plenario.”

Pide por tanto que se revoque la providencia y en su lugar se admita la demanda.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia.

¹ Folios 58-60 del expediente.



De conformidad con lo establecido en los artículos 153² y 243³ del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto dentro del proceso de referencia, por lo que procede a resolver de fondo.

Problema jurídico.

La controversia jurídica planteada se resuelve respondiendo a la siguiente pregunta:

- ***¿Hay lugar a rechazar la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control procedente en este caso, el cual no es otro que el de la nulidad y restablecimiento del derecho?***

5.3. Tesis de la Sala.

Estima la Sala que en este caso el medio de control de reparación directa no es el procedente; asistiéndole razón al *a quo* en la interpretación y adecuación al medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que el perjuicio a reparar, deviene de un acto administrativo, de modo que, una vez identificados y revisados los presupuestos procesales, lleva a concluir que ha operado el fenómeno procesal de la caducidad de ese medio de control. Confirmará entonces la providencia impugnada.

5.4. Marco normativo.

El literal i), numeral 2° del artículo 164 del CPACA, preceptúa:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. *La demanda deberá ser presentada:*

(...)

2. *En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:*

(...)

d) *Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;*

(...).

i) *Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.*

5.5. Caso concreto.

² “**Artículo 153.** Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.”

³ “**Artículo 243.** *Apelación.* Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: (...)

3. El que ponga fin al proceso. (...)”



Corresponde a la Sala en primer lugar, determinar si la demanda sigue la ritualidad prevista para el medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140⁴ del CPACA, o si atendiendo a los hechos y pretensiones de la misma, lo es de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138⁵ ibídem.

Advierte para ello, que los hechos narrados allí, son los siguientes (folios 29-32):

Dijo el señor Oscar Luis Ortega Ruiz, que pertenecía a la Armada Nacional, ostentando el grado de suboficial primero, fue retirado del servicio a través de la Resolución No. 262 de abril 15 de 2011⁶, *“Por la cual se retira del servicio activo a un Suboficial de la Armada Nacional”*, por inasistencia al servicio sin causa justificada.

A folios 4-14 obra fallo de primera instancia dentro de la investigación disciplinaria en contra del señor Oscar Luis Ortega Ruiz que data de diciembre 21 de 2015 y resolvió un proceso disciplinario iniciado mediante auto de febrero 10 de 2011, el cual resolvió abstenerse de formular cargos al suboficial primero ® Oscar Luis Ortega Ruiz.

La parte demandante promovió este medio de control alegando la falla en el servicio, por la decisión del retiro definitivo del servicio del suboficial por una falta disciplinaria que no existió.

El juez *a quo* rechazó la demanda bajo el argumento que en el presente caso hay una indebida escogencia del medio de control y que ha operado el fenómeno de la caducidad en los términos de la nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control al cual procedería su adecuación, toda vez que la indemnización de perjuicios que pide, proviene de una decisión contenida en la Resolución No. 262 de abril 15 de 2011, por la cual se retiró del servicio activo de la Armada Nacional al señor Oscar Luis Ortega Ruiz.

⁴ “**Artículo 140. Reparación directa.** En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. (Expresión subrayada declarada exequible por el cargo examinado. Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011) Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

(...)

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.”

⁵ “**Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.** Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

⁶ Folio 3 del expediente.



Decisión esta que fue recurrida en apelación por la parte actora, la cual considera que el daño que se pretende que sea reparado deviene de una presunta mora en el desarrollo de una acción disciplinaria, por exceder los términos establecidos en la Ley 836 de 2003.

Para resolver la alzada, la Sala primero hará referencia a lo anotado por el Consejo de Estado⁷ mediante auto de julio 13 de 2016, al conocer de la apelación propuesta contra la declaración de improcedencia del medio de control de reparación directa y la subsecuente configuración del fenómeno de caducidad respecto del de nulidad y restablecimiento del derecho, expresó:

“...para efectos de resolver el caso concreto conviene discurrir acerca de la procedencia o no, de la pretensión de reparación directa para solicitar la indemnización de perjuicios ocasionados por un acto administrativo; luego entonces es menester realizar unas consideraciones acerca de las pretensiones en discusión, tal y como pasa a verse:

(...)

De las disposiciones citadas, se puede apreciar claramente la diferencia existente entre las referidas pretensiones, en tanto las causas o conductas administrativas que motivan el ejercicio de una u otra son distintas. Mientras la primera encuentra su causa en un acto administrativo, bien sea de carácter general o particular, la segunda se fundamenta en el daño causado por un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Así mismo, el objeto de esas pretensiones es diferente, de tal manera, que la primera persigue la declaratoria de nulidad del acto administrativo y el consecuente restablecimiento del derecho y, a través de la segunda, se pretende la declaratoria de la responsabilidad extracontractual y la reparación del daño.

No obstante lo expuesto, esta Corporación se ha referido en reiteradas ocasiones, a la posibilidad de ejercer la pretensión de reparación directa cuando el daño haya sido ocasionado por actos administrativos legales, con fundamento en el daño especial⁸, o los declarados nulos una vez ejercido el control jurisdiccional sobre los mismos. En relación con estos últimos, tema que nos ocupa en el sub examine, la Subsección se ha pronunciado de la siguiente forma:

“...es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para atacar la legalidad de los actos administrativos que causen daños a las personas, no siendo del caso la ventilación de dichas controversias a partir de la acción de reparación directa. Sin embargo, pese a lo antes dicho, de forma excepcional, en

⁷ C. de E. Sección Tercera - Subsección “A”. CP. Dr. Hernán Andrade Rincón. Providencia de julio 13 de 2016. Radicación: 68001-23-33-000-2015-00416-01(55235). Actor: Leonor Patricia Salas Quintero - Demandado: Municipio de Bucaramanga.

⁸ “Los actos administrativos, como expresión de la voluntad de la administración pública con la finalidad de producir efectos jurídicos, deben basarse en el principio de legalidad, el cual se constituye en un deber ser: que las autoridades sometan su actividad al ordenamiento jurídico. Pero es posible que en la realidad la administración viole ese deber ser, es decir, que no someta su actividad al ordenamiento legal, sino que, por el contrario, atente contra él. Se habla, en este caso, de los actos y actividades ilegales de la administración y aparece, en consecuencia, la necesidad de establecer controles para evitar que se produzcan esas ilegalidades o para el caso en que ellas lleguen a producirse, que no tengan efectos o que, por lo menos, los efectos no continúen produciéndose y se indemnicen los daños que pudieron producirse. Cuando ello pasa y quien se encuentre afectado con la decisión administrativa alegue la causación de un perjuicio derivado de la ilicitud o ilegalidad de la misma, las acciones procedentes son las acciones de nulidad o también llamadas acciones de legalidad o de impugnación. Sin embargo, cuando esto no sucede, es decir, no se discute la validez del acto administrativo, y solo se alega la causación de perjuicios, la acción procedente es la de reparación directa”. C. de E. Sección Tercera, sentencia de abril 27 de 2006, Exp. 16.079, rad. 19001-23-31-000-1996-07005-01, Actor: María del R. Arias Vallejo, demandado: Municipio de Popayán, CP. Ramiro Saavedra Becerra.



aquellos casos en los cuales se haya declarado la nulidad de un acto administrativo de carácter general, es posible demandar la declaratoria de responsabilidad estatal, mediante acción de reparación directa, siempre y cuando no exista –entre el daño y el acto general- uno de carácter particular que pueda ser objeto de acción en sede judicial, siendo para estos eventos aplicable como título de imputación el de falla en el servicio.

Lo anterior adquiere sentido por cuanto, una vez declarada la nulidad del acto administrativo de carácter general, es posible que este cause perjuicios particulares que resultan imposibles de ser atacados por medio del contencioso subjetivo de nulidad en tanto dicho acto ha desaparecido previamente del ordenamiento jurídico”⁹ (Subraya la Sala).

Descendiendo al *sub lite* la parte actora sostiene en la demanda:

“DECIMOCUARTO.- A pesar de la existencia del proceso penal y disciplinario en curso, el Comando de la Armada Nacional expide la resolución No. 262 del 15 de abril de 2011, mediante la cual retira del servicio activo por inasistencia al servicio sin causa justificada, del suboficial Primero OSCAR LUIS ORTEGA RUIZ, toda vez que se presenta una decisión administrativa, proferida antes de que fueran falladas las investigaciones penales y disciplinarias que serían fundamento del acto administrativo de retiro del Demandante, razones que desaparecen con el auto del 21 de diciembre de 2015 notificado el 11 de febrero de 2016”.

Según lo expresado por el apoderado de la parte actora, la decisión tomada por el Comandante de la Armada Nacional de retirar del servicio activo al suboficial primero señor Oscar Luis Ortega Ruiz por medio de la Resolución No. 262 del 15 de abril de 2011, a su juicio queda: “*sin causa justificada*” con la decisión de diciembre 21 de 2015 y por esta razón, señala este extremo de la *litis*, solo era posible demandar dicha resolución en ejercicio de la pretensión de reparación directa, toda vez que por ese medio era procedente el reclamo de la indemnización de los perjuicios sufridos entre el primer acto, es decir, el inicio de la investigación disciplinaria, y el segundo acto, es decir, cuando se abstiene el comando Flotilla de Superficie del Pacífico de formular cargos en contra del demandante, pues conforme a su decir, no se discute la legalidad del acto, sino el perjuicio que este causó en el lapso de tiempo en el que transcurrió el proceso disciplinario.

Observa la Sala, que existe un acto administrativo mediante el cual se retiró del servicio activo de la Armada Nacional al demandante y es con ese acto, -que no es otro que la Resolución No. 262 del 15 de abril de 2011- el que ocasiona el perjuicio alegado por el actor, por lo tanto, es dicho acto el que debió ser impugnado a través de la pretensión pertinente, que por pretenderse el resarcimiento de los perjuicios generados con el mismo, no es otra sino la de nulidad y restablecimiento del derecho.

No es cierto que, como lo deja planteado la parte demandante, que el perjuicio, es decir el retiro del servicio activo del actor, fuera producto o estuviera condicionado al resultado del proceso disciplinario. Circunstancias estas que difieren sustancialmente y por lo tanto no pueden confundirse.

⁹ C. de E. Sección Tercera, sentencia de marzo 21 de 2012. Expediente 21.986, radicación 25000-23-26-000-1998-02034-01, Actor: Jorge Alberto Munévar, demandado: Distrito Capital.



El retiro temporal con pase a la reserva es una de las formas de retiro del servicio activo de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares consagradas en el Capítulo II del Título IV, definidas en el artículo 99 y cuyas causales y formas están delimitadas en los artículos 100 y 109, todos del Decreto-Ley 1790 de septiembre 14 de 2000.

En cambio, la acción disciplinaria tiene como consecuencia las sanciones previstas en el Título IV de la Ley 836 de julio 16 de 2003, artículos 61 y 62.

Dichas disposiciones establecen lo siguiente:

Decreto-Ley 1790 de 2000

“Artículo 99. Retiro. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.

El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.

Artículo 100. Causales del retiro. <Modificado, artículo 5 Ley 1792 de 2016¹⁰. El nuevo texto es:> El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación:

a) Retiro temporal con pase a la reserva:

- 1. Por solicitud propia.*
- 2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto.*
- 3. Por llamamiento a calificar servicios*
- 4. Por sobrepasar la edad correspondiente al grado.*
- 5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.*
- 6. Por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.*
- 7. Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literal a) de este decreto.*
- 8. Por retiro discrecional de acuerdo con el artículo 104 de este decreto.*
- 9. Por no superar el período de prueba;*

b) Retiro absoluto:

- 1. Por invalidez.*
- 2. Por conducta deficiente.*
- 3. Por haber cumplido la edad máxima permitida para los servidores públicos de acuerdo con la ley.*
- 4. Por muerte.*

¹⁰ La disposición original no fue modificada en su numeral 6 del literal a), que el que viene al caso.



5. *Por incapacidad profesional de conformidad con el artículo 108 literales b) y c) del presente decreto.*

6. *Por fuga del personal privado de la libertad por orden de autoridad judicial, sin perjuicio de la acción penal y disciplinaria que corresponda.*

(...)

Artículo 109. Retiro por inasistencia al servicio sin causa justificada. Los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares serán retirados en cualquier tiempo de servicio activo, por inasistencia al servicio sin causa justificada de acuerdo con el tiempo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio, o cuando acumulen igual tiempo en un lapso de treinta (30) días calendario, sin perjuicio de la acción penal y disciplinaria correspondiente.”

Ley 836 de 2003

“**Artículo 61.** Definición de las sanciones. Las sanciones disciplinarias son:

1. *Separación absoluta de las Fuerzas Militares: Es la cesación definitiva de funciones.*
2. *Suspensión: Consiste en la cesación temporal de funciones en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración.*
3. *Reprensión: Es la desaprobación expresa que por escrito hace el superior sobre la conducta o proceder del infractor.*
4. *Las inhabilidades general y especial en los términos de los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 734.*
5. *Cuando se imponga separación absoluta de las Fuerzas Militares, ello implica pérdida del derecho a concurrir a las sedes sociales y sitios de recreación de las Fuerzas Militares.*

Artículo 62. Clasificación de las sanciones:

1. *Separación absoluta. Para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales cuando incurran en falta gravísima dolosa.*
2. *Suspensión hasta por noventa (90) días sin derecho a remuneración. Se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales que incurran en falta grave o gravísima. En ningún caso se computará como tiempo de servicio.*
3. *Reprensión simple, formal o severa. Se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados cuando incurran en faltas leves.*

Como puede verse, el hecho por el cual se demanda no es consecuencia de una acción disciplinaria, sino de una situación administrativa de la carrera de las fuerzas militares.

La posibilidad excepcional de demandar en reparación directa, como lo señaló el Consejo de Estado en la providencia citada arriba, solo procede cuando se haya declarado la nulidad de un acto administrativo de carácter general y siempre y cuando no exista –entre el daño y el acto general- otro de carácter particular que pueda ser objeto de acción en sede judicial, siendo para estos eventos aplicable como título de imputación el de falla en el servicio, que no es el caso aquí tratado.

Conforme a lo dicho, viene a ser improcedente en este asunto el ejercicio de la pretensión de reparación directa, como quiera que el daño por el cual se demandó no provino de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo



una expresa instrucción de la misma, ni como tampoco del lapso de tiempo durante el cual transcurrió el proceso disciplinario, sino, en cambio, de la Resolución No. 262 del 15 de abril de 2011, por medio del cual se retiró del servicio activo al Suboficial Primero Oscar Luis Ortega Ruiz.

No cabe duda entonces en el *sub lite*, que el acaecimiento del hecho generador del daño por el cual reclama el actor, se originó el 15 de abril de 2011, fecha en la cual se le retiró del cargo de Suboficial Primero, como consta a folio 3 del expediente.

Con la lectura de la norma y vista la jurisprudencia transcrita, es claro que por regla general el término de caducidad para este medio de control se contabiliza a partir del día siguiente a la fecha de comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo acusado, según el caso y de los hechos de la demanda, se deduce con toda claridad que el demandante al momento de ejercitar el medio de control de reparación directa, hacía mucho más de cuatro meses (más de cuatro años) había sido retirado del servicio activo en forma temporal con pase a la reserva.

Por lo tanto, es a partir de la fecha en que se comunicó al señor Oscar Luis Ortega Ruiz que era retirado del servicio activo de la Armada Nacional por “*INASISTENCIA AL SERVICIO SIN CAUSA JUSTIFICADA*”, por más de diez días consecutivos de conformidad con lo establecido en el Decreto 1790 de 2000, artículos 100 literal a) numeral 6 y 109, o a más tardar cuando se ejecutó tal decisión, que se debe contabilizar el término de cuatro (4) meses para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, término que está ampliamente superado.

Con fundamento en ello, encuentra la Sala que no le asiste razón al apelante pues como ya lo explicó, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, de manera que tampoco puede pregonarse un daño continuo ya que los efectos de la Resolución No. CODISADM-FT-017-IGAR-C02 del 21 de diciembre de 2015, por medio de la cual decide la Armada Nacional no formular cargos contra el demandante, no reviven términos, y este se contabilizará a partir del acto administrativo que le generó el supuesto perjuicio.

5.6. Conclusión

La Sala confirmará el Auto No. 480 del 25 de septiembre de 2017, pues en el presente asunto ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo resolvió el *a quo*.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión del Sistema Oral,



RESUELVE

PRIMERO. CONFÍRMASE el auto No. 480 de septiembre 25 de 2017, por el cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura rechazó la demanda.

SEGUNDO: REMÍTASE el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. Acta No. ____

Los magistrados,

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

OMAR EDGAR BORJA SOTO
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS